

Burocracia: ¿Mal necesario?

MARCELO COLUSSI

LA LITERATURA LO confirma por doquier: “La burocracia se expande para satisfacer las necesidades de una burocracia en expansión”, escribió alguna vez mordaz el británico Oscar Wilde. Pensemos igualmente en algunas de las grandes novelas de Franz Kafka (**El proceso** o **El castillo**), de principios del siglo XX: los personajes quedan siempre desgarradoramente atrapados por las redes de burocracias impersonales que se terminan haciendo patéticas, trágicas..., como el ejemplo con que abrimos el texto. “Nuestros dos principales problemas son la gravedad y el papeleo. Nosotros podemos lidiar con la gravedad, pero a veces el papeleo es abrumador”, dijo apesadumbrado Wernher von Braun, uno de los grandes científicos del siglo pasado.

La burocracia es un producto de la modernidad. El surgimiento del Estado moderno es, en otros términos, la aparición de una burocracia organizada. Es decir: el capitalismo fue haciendo la vida cada vez más compleja, necesitando un orden crecientemente estricto y racional para poder funcionar. La burocracia en tanto “gobierno de los escritores”, es un elemento consustancial a ese crecimiento y complejización del mundo de la industria en expansión, de las comunicaciones que globalizan el mundo, de la super especialización del trabajo.

En otros términos, la burocracia es una forma racional de organizar una determinada entidad y/o actividad buscando la optimización en su funcionamiento, para lo que se busca la mayor precisión, transparencia, velocidad y eficiencia posibles. La burocracia nació para ayudar la gestión de las cosas, no para entorpecerla. De hecho, surge en la estructura de los Estados modernos, pero hoy día ya es parte fundamental de toda gran empresa (burocracia corporativa), siendo lo que posibilita su funcionamiento empresarial eficiente a escala planetaria. Max Weber consideró a la burocracia como una forma de organización que

pone el acento en elementos positivos tales como la precisión, la velocidad, la claridad, la regularidad, la exactitud y la eficiencia, todo lo cual se consigue por medio de la división predeterminada del trabajo, de su supervisión jerárquica y de rigurosas y precisas regulaciones que lo enmarcan. De ese modo, la burocracia (de Estado o de las grandes empresas capitalistas) representa un orden racional que deja a un lado el “capricho” de la dirección, la improvisación o el carisma del jefe. Si algo tiene de positivo la organización burocrática es que cada trabajador y/o cada ciudadano se atienen a normas de funcionamiento, a reglas de juego precisas, y no queda librado a los azares de la vida.

Merced a esos procedimientos previamente pautados (rígidamente pautados, se podría agregar), todo el mundo se atiene a normas preestablecidas que, se supone, deben hacer la cotidianeidad más organizada, más fácil, menos aleatoria. La eficiencia que se desprende de esa organización debe pagar el precio de una rutina burocrática a veces aburrida... o enloquecedora, como en el ejemplo con que abrimos el presente texto. Pero esos “excesos” son la otra cara de un proceso que, en principio al menos, promete mayor racionalidad.

La sociedad capitalista, tanto su Estado como sus empresas privadas productivas (de bienes o servicios), está fundada sobre ese rígido orden burocrático. Lo mismo ha sucedido con las experiencias socialistas; allí la burocracia no solo no tendió a desaparecer sino que, por el contrario, se maximizó. Puede llegar a decirse que el socialismo real conocido durante el siglo XX es un socialismo especialmente burocrático (¿pesadamente burocrático?). Esto ya nos marca una ruta de por dónde debemos plantearnos las cosas: ¿es la burocracia un mal necesario?

Ahora bien: en la percepción generalizada de la población, la burocracia es una carga pesada, una desgracia que hay que sufrir/soportar. Y ello no es solo “percepción”: es una descamada realidad. Ejemplos como

el de nuestro pensionado no son tan inusuales. Las burocracias, en principio las estatales, aunque también ello puede encontrarse en la iniciativa privada, muchas veces terminan convirtiéndose en un martirio para el usuario. La excesiva actividad regulatoria termina produciendo duplicación de esfuerzos y, en muchos casos, ineficiencia administrativa. En vez de facilitarse la solución de problemas, los mismos se perpetúan y las soluciones se demoran excesiva e innecesariamente.

Valga este ejemplo: durante la época colonial de América (siglos XVI al XIX), el reino de España llegó a tener alrededor de 400 000 leyes para regular la administración de tan vastos territorios. Si bien en 1681 hubo un intento de racionalización de tamaño monstruo burocrático reduciéndose a 11 000, el peso paquidérmico y la ineficiencia de ese aparato más que facilitar las cosas, las fue tornando cada vez más inviables. No solo por eso, pero sí como un elemento más que contribuyó, finalmente la Corona española tuvo que retirarse de esas tierras. La ineficiencia y corrupción de la burocracia colonial se hizo evidente, y su peso se tornó inmanejable. En buena medida esa “cultura burocrática” quedó instalada en tierras latinoamericanas; de ahí el “cáncer” burocrático de nuestras administraciones públicas.

Ahora bien: ¿por qué esa percepción generalizada de los usuarios (la población en general) que considera a la burocracia como pesada, molesta, especialmente rígida, falta de creatividad para solucionar situaciones novedosas que se salen del manual, enloquecedora? Porque de hecho, en innumerables situaciones así funciona.

En el marco de la empresa privada la burocracia tiende a ser menos ineficiente en la atención de sus usuarios porque allí “pérdida de tiempo” significa “pérdida de dinero”. Y si algo pone en marcha y mantiene esa lógica es el lucro. Por tanto, aunque el cliente no es más que un consumidor al que se hace prosternar reverencial ante el altar del

consumo, no se le trata tan mal, porque en definitiva es él quien paga. En el ámbito de la burocracia pública, allí donde se extiende el prejuicio que “en el Estado no hay patrón” y que las prestaciones son “gratuitas” (¿como que nadie las pagará!: son un derivado de la plusvalía que circula socialmente), el burócrata tiene la aureola de intocable. El poder de la burocracia, rígida y refractaria a cualquier cambio, y más allá de su ineficiencia, de su espíritu “enloquecedor” que en muchos casos nada sirve al usuario más que para “enloquecerlo”, está bastante ilimitado allí. Las burocracias, entonces, no están en función de facilitar las cosas transparentándolas y haciéndolas eficientes sino que permiten la corrupción y, en muchos casos, son un obstáculo para el buen funcionamiento.

¿Se podrá eliminar ese chaleco de fuerza burocrático? En las sociedades opulentas del Primer Mundo, donde las tecnologías cambian día a día la vida cotidiana, estaríamos tentados a decir que sí, producto justamente de esas tecnologías que facilitan y simplifican los procedimientos. Pero bien observado, los niveles de control que esas burocracias ejercen sobre sus poblaciones es infinitamente mayor al que se ejerce en los estados de las sociedades pobres. Es, en todo caso, más sutil, más sofisticado, y el “papeleo” en cuestión es menor. Pero los grados de control y manipulación son mayores aún.

¿Y en el socialismo? La sociedad de “productores libres asociados” concebida por Marx y Engels hace siglo y medio, libre de ataduras burocráticas, aún parece que está lejos. Nadie dice que sea imposible. Lo que sí, lo que la experiencia concreta mostró en los primeros balbuceos del socialismo del siglo XX es que la burocracia tomó un papel preponderante en la organización. ¿Mal necesario del que ninguna sociedad compleja puede escapar? El reto es ir más allá de eso. Como dijera Hegel: “El límite solo se conoce yendo más allá”. **(Fragmentos tomados de ARGENPRESS.info)**

Acusan a dirigentes del PP español de repartirse sobresueldos

La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que ejerce la acusación popular en la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad atribuida al extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, cifra en 22 millones 334 mil euros el dinero que los dirigentes de esta formación se habrían repartido en sobresueldos y gastos de representación entre los años 1990 y el 2011.

Así consta en un escrito remitido por esta parte al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se reclama que 40 dirigentes y antiguos responsables “populares”, entre ellos el presidente del Gobierno Mariano Rajoy y el jefe del Ejecutivo José María Aznar, aporten sus declaraciones fiscales para corroborar que declararon a Hacienda estas percepciones.

El escrito de la asociación de letrados, que adjunta una tabla de remuneraciones realizada a partir de los denominados “papeles de Bárcenas”, la contabilidad oficial del PP y del Tribunal de Cuentas y la información remitida por la UDEF y la Agencia Tributaria, también pide al juez Ruz que dirija un oficio al Congreso de los Diputados y al Senado para que entreguen las declaraciones de actividades, bienes y rentas de los cargos “populares” que ocuparon un escaño.



Aznar y Rajoy en sus cavilaciones.

RAJOY, A LA CABEZA

Según la tabla de ADADE, el dirigente “popular” que más dinero cobró en sobresueldos y gastos de representación fue el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con un millón 580 mil 752,81 euros entre 1990 y el 2011. Al sumar

su sueldo como parlamentario, como presidente del Gobierno y ministro y las percepciones consignadas en los “papeles de Bárcenas” sus remuneraciones ascienden a tres millones 473 mil 853,60 euros.

También aparecen en la lista el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete (con un total de 2,8 millones de euros); los exsecretarios generales del PP Javier Arenas (2,8 millones) y Ángel Acebes (2,6 millones); el coordinador de Organización, Juan Carlos Vera (2,4 millones); el exministro de Defensa Federico Trillo (2,4 millones); el presidente del Senado, Pío García Escudero (2,3 millones); los ministros de Sanidad, Ana Mato, y Hacienda, Cristóbal Montoro (2 millones cada uno), y el exsecretario general Francisco Álvarez Cascos y el exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda (con 1,9 millones, respectivamente).

Figuran asimismo el ex presidente del Gobierno José María Aznar (1,7 millones); el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz (1,7 millones); el ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato (1,2 millones); la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáez de Santamaría (1,1 millones) y la secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal (918 mil 331 euros). **(Europa Press)**